



-000008-

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

DICTAMEN DE COMISION

HONORABLE PLENO

ANTECEDENTES

Con fecha dieciséis de noviembre del dos mil seis, el honorable Pleno del Congreso de la República, remitió a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, la iniciativa 3560 que dispone aprobar reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, para su estudio y dictamen correspondiente el cual se presenta a continuación:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa 3560 consta de dos artículos, y pretende modificar el artículo 173 del Código Procesal Penal, el cual establece la obligación de la Policía Nacional Civil de realizar las citaciones de personas a solicitud del Ministerio Público o los tribunales de justicia. La iniciativa pretende descargar a la Policía Nacional Civil de esta función, trasladando al Ministerio Público y al Organismo Judicial esta responsabilidad por medio de sus órganos correspondientes.

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de la República son deberes del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Así mismo el artículo 140 de la Constitución establece que Guatemala es un Estado republicano, lo que implica la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno de ellos con sus funciones bien delimitadas.

Es así que de acuerdo al artículo 183 de la Constitución le corresponde al Organismo Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público y ejercer el mando de toda la fuerza pública, entre otras funciones. Por otra parte el artículo 203 de la Constitución Política de la República establece que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado y que "Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones".

Es evidente que aunque la Constitución establece la obligación de los demás organismos del Estado de prestar auxilio a los tribunales de justicia, esta obligación se



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

refiere a que el Ejecutivo o sus instituciones deben auxiliar al Organismo Judicial de acuerdo a la especialidad de cada institución. En este sentido, la Policía Nacional Civil como institución dependiente del Ministerio de Gobernación, tiene establecidas funciones específicas de prevención, contención e investigación del delito, siendo estas las tareas en las cuales puede prestar auxilio a los tribunales de justicia y al Ministerio Público y excluyendo otras que no le competen directamente.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL

El artículo 113 del Código Procesal Penal establece que la Policía actuará bajo la dirección del Ministerio Público en materia de investigación, y que además: "Deberán cumplir también las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes pende el proceso".

Por su parte el decreto 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil establece en su artículo uno que el fin principal de la Policía Nacional Civil es la seguridad pública. Así mismo el artículo 10 del mismo cuerpo legal establece como funciones de la PNC: "...e) Aprender a las personas por orden judicial o en los casos de flagrante delito y ponerlos a disposición de las autoridades competentes dentro del plazo legal...n) Atender los requerimientos que dentro de los límites legales, reciban del Organismo Judicial, Ministerio Público y demás entidades competentes.

Es claro que las leyes establecen la obligación de la Policía Nacional Civil de prestar auxilio a los tribunales de justicia; sin embargo, también se debe tomar en cuenta que la función principal de la Policía es el mantenimiento de la seguridad pública, y la protección de la vida, la libertad, integridad y seguridad de los habitantes. En ese sentido se debe considerar que en ningún momento es conveniente que un órgano cuyo fin principal esta establecido en la ley, descuide este fin superior por cumplir otros fines distintos al fin principal para el que fue creado; particularmente cuando la tarea que se le solicita no requiere de las calificaciones particulares de un agente de policía, sino son tareas puramente administrativas que puede cumplir un notificador o un mensajero.

Por su naturaleza, la Policía Nacional Civil constituye un cuerpo de seguridad de la nación, cuyas funciones principales son la prevención e investigación de los delitos, funciones que actualmente se encuentran en crisis, lo que ha generado altos índices de violencia e inseguridad en el país, y por lo tanto es importante descargar a la Policía de aquellas funciones que pueden cumplir otros órganos del Estado como son las citaciones. Además se debe considerar que las citaciones ante el Ministerio Público o los tribunales de justicia, no es una función que necesite el empleo de la fuerza pública, esto sin desmedro de que la incomparecencia injustificada de la persona citada, amerite



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

su conducción por la fuerza pública, casos en los cuales si es necesario el apoyo de la Policía Nacional Civil.

Como se expresa ilustrativamente en la exposición de motivos de la iniciativa analizada, el realizar estas tareas administrativas se emplea mucho tiempo y recurso humano, y dado que en Guatemala es insuficiente el número de policías para cumplir con sus tareas de prevención y contención del delito, no es aconsejable que se destinen efectivos policiales para realizar otras tareas; además, tanto el Ministerio Público como el Organismo Judicial cuentan con recursos económicos suficientes para llenar su necesidad de realizar citaciones y notificaciones sin utilizar los servicios de la Policía Nacional Civil.

En ese sentido, y de acuerdo a lo planteado en reiteradas ocasiones por la autoridades del Ministerio de Gobernación, el auxilio prestado por la Policía Nacional Civil en materia de citaciones al Ministerio Público y al Organismo Judicial, representa un costo de tiempo y esfuerzo importante para la institución policial, en desmedro de su función principal, por lo que corregir esta situación constituye una necesidad social impostergable en aras de lograr una efectiva seguridad pública.

DICTAMEN

En base a las anteriores consideraciones de orden constitucional, legal y político esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa 3560 de reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.

**DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE EXTRAORDINARIA DE
REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.**

JUAN RAMON ALVARADO HERRERA
Presidente

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RUBIO
Vicepresidente

JORGE MARIO BARRIOS FALLA

CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*


CARLOS ENRIQUE BAUTISTA GODINEZ


MANUEL ANTONIO BALDIZON


MARCO VINICIO CEREZO AREVALO


CARLOS AUGUSTO VALLE TORRES


GLADYS ANABELLA DE LEON


CARLOS ALBERTO GODOY FLORIAN


MARIO RENE CHAVEZ GARCIA


JORGE LUIS ORTEGA



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

DECRETO NUMERO.....

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como deberes fundamentales del Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana

CONSIDERANDO:

Que la Policía Civil como encargada de la prevención y la represión del delito no puede desviar su atención en realizar funciones administrativas tales como citaciones y notificaciones a cargo del Organismo Judicial y del Ministerio Público, porque desatiende su función principal de prestar seguridad y garantizar así la vida, la libertad, la seguridad y la paz de las personas que viven y transitan en Guatemala. Siendo que el derecho debe ser una respuesta a la realidad nacional del país, es necesario reformar las obligaciones atribuidas en el Código Procesal Penal a la Policía Nacional Civil en cuanto a tareas administrativas que pueden ser dentro del rol de sus funciones realizadas por el Ministerio Público y por el Organismo Judicial.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 134 y 171 literal a) de la Constitución Política de la República,

DECRETA:

La siguiente:

REFORMA AL CODIGO PROCESAL PENAL.

Artículo 1. Se reforma el artículo 173 del Código Procesal Penal, el cual queda así:

“Citación: Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto, o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar.

La Citación contendrá:

1. El tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer.
2. El motivo de la citación.
3. La identificación del procedimiento.
4. Lugar, fecha y hora en que debe comparecer.

Al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren, las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente, y que, en caso de impedimentos deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo.

La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que habiendo sido citada legalmente no comparezca al acto o notificación para el que fue citado”

Artículo 2. El presente decreto cobrará vigencia el día de su publicación en el diario oficial.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo a los.....